

Respeto al derecho ciudadano

Por LISET GARCÍA

GRAN impacto en la población tendrán las cuatro leyes relacionadas con el ámbito judicial que deben debatirse y aprobarse en la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), prevista para mediados de julio y aplazada por la situación sanitaria del país.

Se trata de normas que actualizan el accionar de los Tribunales Populares de Justicia en materia civil, administrativa, laboral, económica y penal, cuya impronta en los derechos y garantías de los ciudadanos despertan gran interés. Si modernos y hasta revolucionarios pudieran considerarse algunos de los postulados que aparecen por primera vez en esas normas, vienen de los nuevos preceptos constitucionales refrendados en 2019.

Los textos de estas nuevas leyes, como se ha hecho habitual en el ejercicio legislativo cubano, están publicados en **parlamentocubano.gob.cu**, sitio web de la ANPP, a fin de recoger opiniones y que el proceso de su elaboración sea cada vez más democrático.

Fue el Tribunal Supremo Popular el que ejerció ahora la iniciativa legislativa, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Décima de la Constitución de la República de Cuba, el cual dictaminó la forma y el plazo para presentar los anteproyectos de estas leyes que modifican las vigentes.

En su redacción los expertos tuvieron en cuenta la necesidad de actualizar y dar mayor coherencia a la práctica judicial en Cuba, a partir de convenciones, protocolos y otros tratados internacionales ratificados por el país, también las mejores experiencias y disposiciones normativas avanzadas de otras naciones.

Paso de avance con respecto a la legislación actual es la supresión de trámites burocráticos, con lo cual se agilizarán y simplificarán proce-

deres, regulados en el nuevo Código de Procesos, una de las cuatro leyes que serán aprobadas por los diputados. En este se establece y regula de manera general cómo operar asuntos que, aunque de diversas materias (civil, familiar, mercantil, del trabajo y la seguridad social), pueden tener similares modos de encaminarse.

Entre otras novedades que refuerzan derechos y garantías está el acceso a la justicia y el llamado debido proceso, preceptuados en los artículos 92 y 94 de la Carta Magna, que incluyen la reparación o indemnización por daños causados indebidamente por directivos, funcionarios o empleados. Esta posibilidad explícita hasta ahora no existía, como tampoco el tratamiento a víctimas y personas vulnerables, que contarán con especial protección.

Quiere decir que por primera vez los ciudadanos podrán establecer demandas contra quienes los afecten. El objetivo de las reclamaciones será la rectificación de los actos que provocaron perjuicios. Obviamente, antes habrá que agotar el recurso de ir ante la autoridad superior al supuesto responsable de la nociva decisión.

Y claro está que no por obra y gracia de milagros se hará cumplir la Constitución. Estas nuevas leyes por sí solas tampoco protegerán más a los ciudadanos. Solo con su conocimiento profundo y la exigencia de los derechos de cada cual saldrá el respeto a sus articulados, a la institucionalidad.

Hay que curarse de quienes invocan “su propia ley” para instaurar normas torcidas en exceso y hacen difícil lo que podría resultar fácil —sin hablar del maltrato y la escasa sensibilidad de no pocos—. Aprender a manejar y defender los derechos, en blanco y negro, en la Constitución y en leyes como estas, y que se pongan en práctica, será también un deber ciudadano.